



Comunidad  
de Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD



UNIÓN EUROPEA  
FONDO SOCIAL EUROPEO  
El FSE invierte en tu futuro

## ORDEN

Ref.: C-241N/002-18  
Exp.: A/SER-008980/2018

Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se acuerda la no celebración del contrato denominado "Programa de aceleración de proyectos dirigido a emprendedores de la Comunidad de Madrid, promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo".

### ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.-** El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión de 27 de diciembre de 2018, autorizó la contratación del servicio denominado "Programa de aceleración de proyectos dirigido a emprendedores de la Comunidad de Madrid, promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo", así como el gasto para su financiación por importe de 543.338,29 euros.

**Segundo.-** Mediante Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (actualmente Economía, Empleo y Competitividad) de fecha 27 de diciembre de 2018, se aprobó el mencionado expediente de contratación y se acordó la apertura del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para su adjudicación.

**Tercero.-** Licitado el contrato y tras diferentes sesiones de la Mesa de Contratación, mediante Orden 14 de agosto de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se adjudicó el contrato a la Universidad Rey Juan Carlos (CIF Q2803011), por importe de 478.137,70 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

**Cuarto.-** Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, según el artículo 44.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se concedió el plazo estipulado en el artículo 50 de la citada LCSP, sin que fuera presentado ningún recurso.

**Quinto.-** Con fecha 5 de noviembre de 2019, la Dirección General de Autónomos, como unidad promotora del expediente, formuló propuesta de decisión de no celebración el contrato en la que se exponían las razones de interés público que la motivaban, complementada con el escrito de consideraciones de la citada Dirección General, de fecha 18 de febrero de 2020.

Dichas razones, que se recogen de forma pormenorizada en la mencionada propuesta y en la documentación que la fundamenta que obran en el expediente, por lo que no se reproducen íntegramente aquí, pueden resumirse en la variación de la situación presupuestaria respecto de la existente en el momento de la autorización del contrato por el Consejo de Gobierno, en especial, debido a las retenciones en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 y a la ulterior prórroga

## ORDEN

Ref.: C-241N/002-18  
Exp.: A/SER-008980/2018

presupuestaria, que han obligado a redistribuir créditos para dotar suficientemente otras partidas presupuestarias consideradas esenciales o prioritarias, como las de fomento de contratación de personas con discapacidad o de desempleados de larga duración, y a replantear otros proyectos entre los que se encuentra el que es objeto del contrato de servicios denominado “Programa de aceleración de proyectos dirigido a emprendedores de la Comunidad de Madrid”.

**Sexto.-** A la vista de lo actuado, y al amparo del artículo 4.3 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, el 11 de noviembre de 2019 se dió traslado de al Servicio Jurídico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, que con fecha 25 de noviembre de 2019 emitió informe que concluye que la propuesta de no celebración del contrato resulta conforme con el artículo 152 LCSP.

**Séptimo.-** La Intervención Delegada de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad fiscalizó favorablemente la actuación el 20 de febrero de 2020.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** La decisión de no celebrar del contrato sustentada en razones de interés público se ampara en el artículo 152.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que establece que *“Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.”*

Las razones de interés público que justifican la decisión de no celebrar el contrato han quedado oportunamente recogidas en la documentación que integra el expediente y, en particular en la propuesta formulada por la Dirección General de Autónomos con fecha 5 de noviembre de 2019, tal como se ha indicado en el antecedente de hecho quinto, que las resume.

**Segundo.-** El apartado 2 del mismo artículo 152 LCSP establece que *“La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.”*

A este respecto, la cláusula 19ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del contrato señala en su último párrafo que *“Si antes de la formalización el órgano de contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los*



## ORDEN

Ref.: C-241N/002-18

Exp.: A/SER-008980/2018

*licitadores compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica.”*

**Tercero.-** Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la norma que autoriza la cancelación de garantías / depósitos y la normativa aplicable de Contratación Pública, cabe entender, por tanto, que procede acordar de oficio la devolución de la garantía definitiva en el supuesto de no celebración del contrato previa a su formalización, sin necesidad de solicitud ni justificación por parte del adjudicatario.

En conclusión, concurren todos los requisitos establecidos en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para acordar la decisión de no celebrar el contrato de referencia, de acuerdo con los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, y en atención a cuanto se ha expuesto y de acuerdo con la propuesta de la Directora General de Autónomos, de fecha 5 de noviembre de 2019, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

## RESUELVO

**Primero.-** Acordar la no celebración del contrato denominado “Programa de aceleración de proyectos dirigido a emprendedores de la Comunidad de Madrid, promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo”, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, al amparo de lo previsto en el artículo 152 de la LCSP.

**Segundo.-** Conceder a los licitadores un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, para solicitar la compensación por los gastos efectivos en los que hubieran incurrido, con la debida justificación de su valoración económica.

En el caso de que la documentación justificativa ya estuviera en poder de la administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP), el interesado deberá indicar en su solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.

**Tercero.-** Cancelar y devolver la garantía definitiva constituida por la Universidad Rey Juan Carlos (CIF Q2803011), para responder de la ejecución del citado contrato, al haberse acordado la decisión de no celebrar el mismo, sin que se deduzcan responsabilidades a las que deba quedar sujeta.

- Constituyente: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (Q2803011B)
- Nº Resguardo: 201955003500D
- Tipo de garantía: Definitiva
- Modalidad: Efectivo
- Tipo de devolución: Total

## ORDEN

Ref.: C-241N/002-18  
Exp.: A/SER-008980/2018

- Importe constituido: 19.757,76 euros.
- Perceptor de la Devolución: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (Q2803011B)
- Importe a devolver: 19.757,76 euros.

**Cuarto.-** Notificar a los licitadores el contenido de esta resolución por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad previstas en el artículo 347.3 LCSP y en el artículo 22.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la LPACAP, según el procedimiento indicado en el artículo 51.3 de la LCSP; o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la mencionada LCSP, artículos 123 y 124 de la LPACAP y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Manuél Giménez Rasero